

RESOLUCIÓN 4716/2024, DEL DIRECTOR GERENTE, POR LA QUE SE ORDENA LA TRAMITACIÓN Y EJECUCIÓN, CON CARÁCTER DE EMERGENCIA, DEL CONTRATO DE OBRAS, DE REDACCIÓN DE PROYECTO Y DIRECCIÓN FACULTATIVA, Y DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD, EN ORDEN A LA DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO PROPIEDAD DE LA AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL SITO EN LA CALLE PUERTO DEL MILAGRO Nº2, 28018 MADRID.

Visto el expediente de referencia, se constatan los siguientes

HECHOS

Primero. La Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid es propietaria del edificio situado en la calle Puerto del Milagro nº 2 (Distrito Puente de Vallecas, Madrid), construido en el año 1.969, que consta de tres plantas sobre rasante y una superficie construida total de 1.813 metros cuadrados. Está situado dentro de una manzana rodeada por la calle del Puerto del Milagro al Norte y al Este, y la otra calle Puerto de Costabona, al Oeste y al Sur. El edificio, tiene fachada a la calle del Puerto del Milagro, y está separado de los otros lindes menos el del Este, que hace medianera con la edificación que ocupada el Aula de Compensación educativa (ACE) “El Madroñal”.

El edificio venía siendo utilizado desde el año 2002 por la Consejería de Educación para destinarlo a aulario del Instituto de Enseñanza Secundaria Vallecas-Magerit, si bien el 18 de febrero de 2015 se comunica a este Organismo por dicha Consejería la ocupación ilegal del inmueble desde el año anterior, y el consecuente inicio de acciones judiciales en orden a su recuperación posesoria, de conformidad con lo previsto en la Ley 3/2001, de 21 de junio, de Patrimonio de la Comunidad de Madrid.

Desde el año 2014 se han llevado a cabo diferentes actuaciones administrativas y judiciales para la recuperación del inmueble que han resultado infructuosas, en gran medida, derivado de la complejidad de proceder al desalojo de un edificio, comúnmente conocido como “La Atalaya” del que hacen uso decenas de personas y de manera rotatoria. No obstante, finalmente el Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid, en atención a la demanda por delito de usurpación de inmueble presentada por este Organismo el 11 de julio de 2024, dictó Auto de 30 de octubre de 2024 que dispone *“Acordar el desalojo de los moradores del local sito en Puerto del Milagro número 2 de Madrid. Habiendo presentado denuncia el propietario INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID (AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL) que estén utilizando indebidamente el mismo y que deberá realizarse en un plazo no superior a veinte días naturales a contar desde la notificación de la presente resolución (...) se requiere a dicha parte denunciante para que una vez se lleve a cabo el desalojo acordado disponga de todo lo necesario para recuperar la posesión del local y adopte las medidas de seguridad precisas para evitar nuevas ocupaciones”*.



En cumplimiento de dicho Auto, en fecha 26 de noviembre de 2024 se procede al desalojo y toma de posesión por la Agencia de Vivienda Social del inmueble, para lo cual fue necesario un despliegue policial con un número elevado de efectivos, habida cuenta el tamaño del edificio y el numeroso grupo de personas que han venido haciendo uso del edificio, integradas en grupos sociales muy activos como seguidamente se indicará.

Segundo. Una vez se tomó posesión del inmueble, se constata, en una primera inspección visual, un evidente estado de deterioro del edificio con posible riesgo para la seguridad y salud de las personas; en particular, tras comprobar la existencia de grietas en pilares y fachadas, con el peligro potencial de desprendimientos o derrumbe que este tipo de patología podría implicar.

Por ello, y teniendo en cuenta además que durante el prolongado periodo en que ha estado ocupado no ha sido posible realizar la preceptiva Inspección Técnica del Edificio requerida por el Ayuntamiento, así como la existencia de un edificio colindante que pudiera verse afectado como seguidamente se detallará, este Organismo encarga en fecha 6 de diciembre la redacción de un informe técnico para analizar su estado, que es emitido por el arquitecto colegiado número 15.092 José María Arnanz Gómez en fecha 11 de diciembre de 2024, el cual, de manera detallada, recoge las graves deficiencias que presenta el edificio, con origen en su uso inadecuado por los ocupantes, la eliminación por los mismos de elementos constructivos y la falta de mantenimiento, lo que genera una evidente situación de riesgo inminente de desplome o colapso, indicando como medida inmediata la *“prohibición de la entrada al edificio de toda persona debido al estado de precariedad y riesgo de colapso tanto de las fachadas como de la estructura”*, y concluyendo que *“el edificio podría colapsar en cualquier momento, tanto debido al estado de la estructura como al estado de las fachadas”*.

En concreto, el informe refiere *“grietas y deformaciones en fachadas y pilares (...) La estructura del edificio no fue calculada para resistir cargas dinámicas como las que generan las actividades que se han estado desarrollando los últimos diez años en él (...) a un estrés estructural incompatible con su cálculo original (...) se han detectado numerosas zonas donde el ladrillo no apoya más que la mitad de su espesor, estando, por tanto, en un estado comprometido respecto a su estabilidad (...) dichas fachadas se encuentran en un estado de equilibrio inestable pudiendo desplomarse en cualquier momento (...). fachadas del cerramiento exterior es inestable, existiendo el riesgo de que pueda colapsar en cualquier momento (...) No se han colocado elementos de cuelgue desde el forjado superior, con lo cual, todo el peso del muro superior recae a los cargaderos y después a los machones de ladrillo que separan los huecos de ventana. Este conjunto presenta desplome hacia el exterior y riesgo de desplome en cualquier momento”*.

Pero además, en caso de colapso del edificio que nos ocupa, el riesgo es aún mayor en la medida en que dicha situación *“puede afectar gravemente al edificio vecino que está adosado al primer cuerpo por el extremo”*, debiendo hacerse constar que dicho edificio está en uso como Aula de Compensación Educativa en la que se imparten clases de ESO. Con dicho edificio adosado comparte *“la acometida de gas, junto a las paredes medianeras del primer bloque (...) En el rincón que forma la fachada Sur del primer bloque y la medianera del edificio del lindero Este está ubicado el depósito de gasoil y su registro. Ante el posible derrumbe del edificio la instalación de almacenaje y acometida de combustible del antiguo centro quedará, también, gravemente afectada”*.



Tercero. Si bien desde el mismo momento del desalojo, tal y como exige el Auto judicial, se han ido adoptando medidas de manera inmediata en orden a evitar nuevas ocupaciones (tabicado ventanas, intensificación de la vigilancia por parte de la empresa de seguridad contratada por el Organismo, mayor presencia de la policía local, realización de obras en el interior en orden a inutilizar estancias), las mismas resultan insuficientes, existiendo un riesgo cierto y grave de que pueda nuevamente ser ocupado, atendiendo fundamentalmente a dos circunstancias:

- En primer lugar, por las propias características físicas del inmueble: La ubicación y disposición en la parcela del edificio recientemente recuperado, así como su tamaño y configuración constructiva para el uso previsto, hace que la protección contra la nueva ocupación del mismo resulte ciertamente complicada con independencia de los medios de vigilancia y seguridad que se pudieran disponer con ese objetivo. Se trata de un edificio que cuenta con tres bloques unidos de tres alturas, y más de un centenar de aulas, además de huecos en fachadas, numerosas ventanas para iluminación natural de aulas en todas las fachadas, patios interiores con entradas independientes a las edificaciones, tramos de escalera y pasillos previstos para una rápida evacuación etc. De manera que nos encontramos con un edificio de considerables dimensiones, con un amplio perímetro a vigilar y con numerosos accesos y “puntos ciegos”, que dificulta de forma considerable su custodia, sin que la adopción de medidas específicas de seguridad que a priori pudieran resultar adecuadas, garanticen la no ocupación, máxime en un periodo prolongado de tiempo, de meses, que conllevaría la tramitación ordinaria de un contrato de obras de demolición.

En este sentido, solicitado informe por la Secretaría General el 2 de diciembre de 2024 a la empresa de vigilancia del patrimonio de la AVS sobre las medidas que, según su criterio profesional, serían necesarias para una vigilancia adecuada del inmueble, este se emite el siguiente día 3 de diciembre, que señala que *“el mínimo imprescindible para la vigilancia y protección ante posible ocupación del inmueble son: seis vigilantes de manera permanente (las 24 horas de lunes a domingo) con tres vehículos de apoyo (....) Instalación de Alarma conectada con CRA, en el perímetro interior del recinto, con la intención de la detección anticipada de algún intruso que, una vez violada la valla que rodea al edificio, quiera acceder a él”*. Como medidas adicionales, propone la *“utilización de dos patrullas de zona, para la realización de rondas de forma aleatoria por el perímetro exterior, con un objetivo disuasorio, atendiendo al entorno conflictivo que rodea al recinto”* así como *“Tapiado de todas las puertas y ventanas a cualquier altura del edificio para obstaculizar el acceso al mismo”*. Concluye que en todo caso estas medidas *“permiten el establecimiento inicial mínimo de un servicio de vigilancia con el objetivo de limitar el riesgo de ocupación que, en función de nuevas circunstancias detectadas, podría ser necesario ampliar y que en ningún caso aseguran la eliminación completa del riesgo de ocupación”*.

- En segundo lugar, por las amenazas manifestadas por los propios desalojados de intentar recuperar la posesión del inmueble. Los grupos de personas que venían haciendo uso del inmueble, además de muy numerosos, son fundamentalmente colectivos muy activos socialmente, que han manifestado su voluntad de reocupación a través de diferentes medios, tales como redes sociales, manifestaciones (así, tuvo lugar el mismo día del desalojo manifestación de decenas de personas frente a la Asamblea de Madrid contra el desalojo, con pancartas *“LA ATALAYA NO SE RINDE. VALLEKAS RESISTE”* o



“TENEMOS LAS LLAVES”) o concentraciones públicas (Pancartas exhibidas en el partido de fútbol de primera división Rayo Vallecano-Athletic de Bilbao celebrado el 1 de diciembre “LA ATALAYA NO SE ACABA. EL BARRIO ES NUESTRO”).

Cuarto. Debe hacerse constar que el destino del inmueble una vez recuperado es en todo caso proceder a su derribo, a fin de permitir a la Agencia de Vivienda Social llevar a cabo la principal de sus funciones, esto es, la construcción de vivienda pública para los sectores de población menos favorecidos. En este caso, de acuerdo con los parámetros urbanísticos de calificación del suelo y edificabilidad de la parcela, está prevista la construcción de alrededor de sesenta viviendas de integración social.

Resulta imprescindible por tanto que las tareas de derribo previstas se lleven a cabo con la mayor urgencia, siendo esta la única medida y opción posible que asegura evitar el riesgo de ocupación, y con ello, riesgo para la seguridad y salud de los ocupantes ilegales. Asimismo, una nueva ocupación implicaría que deban reiniciarse procedimientos administrativos y/o judiciales encaminados a la recuperación del inmueble, con lo que ello supone de nuevo consumo de recursos públicos; además de implicar una demora en el inicio de las actuaciones necesarias en orden a construir alrededor de sesenta viviendas de integración social.

Por otro lado, el no derribo inminente del inmueble, implica además un coste adicional en vigilancia del edificio, que habría de ser contratada durante el periodo de tramitación de una licitación ordinaria y hasta la ejecución de la demolición. A este respecto, estimando un plazo de todo el proceso en aproximadamente ocho meses, el coste de contratación de la vigilancia mínima imprescindible según el informe antes referido, ascendería a 1.147.521,60 euros, según el siguiente desglose con precios del contrato actualmente vigente.

VIGILANTE	COSTE HORA/DIA		COSTE DIA UNIDAD	240		TOTALES
L-V	DIURNA (06:00 A 22:00)	216,12 €		51.868,80 €	6	311.212,80 €
	NOCTURNA	138,96 €		33.350,40 €	6	200.102,40 €
FS	DIURNA	274,72 €		65.932,80 €	6	395.596,80 €
	NOCTURNA	145,47 €		34.912,80 €	6	209.476,80 €
VEHÍCULO	43,24 €		818,51 €	10.377,60 €	3	31.132,80 €
						1.147.521,60 €

Quinto. A través de la Subdirección de Proyectos y Obras se ha contactado y solicitado oferta a tres empresas para cada una de las prestaciones a contratar a efectos de proceder al derribo:

Obras de demolición: Se solicita el 12 de diciembre oferta a tres empresas (LEZAMA DEMOLICIONES, S.L.U, HERCAL DIGGERS S.L., CONSTRUCCIONES ARRIBAS GOZALO, S.A), requiriéndoles asimismo que presenten, además de su oferta económica, una memora descriptiva del proceso de demolición, el plazo de ejecución y un plazo de inicio de los trabajos, teniendo en cuenta que los mismos deben iniciarse en un periodo no superior a un mes desde la fecha de la presente resolución de conformidad con el artículo 120.1.b) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.



Habiendo declinado participar una de las empresas contactadas (LEZAMA DEMOLICIONES, S.L.U.), se recibe en fecha 13 de diciembre oferta por parte de las dos restantes, por los siguientes importes, IVA no incluido:

- HERCAL DIGGERS S.L.: 503.890,50 euros.
- CONSTRUCCIONES ARRIBAS GOZALO, S.A: 464.100,00 euros.

En esa misma fecha se emite informe de valoración por parte de la Subdirección General de Proyectos y Obras, que estima que la oferta más favorable y ventajosa para la AVS es la presentada por CONSTRUCCIONES ARRIBAS GOZALO, S.A., señalando que *“aunque el procedimiento descrito por cada una de las empresas para la ejecución de los trabajos es correcto, en la oferta presentada por CONSTRUCCIONES ARRIBAS GOZALO, S.A. indica la disponibilidad inmediata de los equipos y de la maquinaria necesaria para llevar a cabo la demolición, además resultar la más ventajosa económicamente. Por todo ello, se propone a la empresa CONSTRUCCIONES ARRIBAS GOZALO, S.A. para la ejecución de los trabajos referidos”*.

Redacción Proyecto y Dirección Facultativa: Se solicita oferta con fecha 13 de diciembre a ALFONSO JOSÉ JIMENO CASADO, ALEJANDRO CONTY VIDAL Y ARQUITECTURA Y TÉCNICAS ESPECIALES (ARTER), requiriéndoles asimismo indiquen fecha de disponibilidad para el comienzo de los trabajos.

Con fecha de 16 de diciembre se presentan las siguientes ofertas, IVA no incluido:

- ALFONSO JOSÉ JIMENO CASADO: 16.050,00 euros.
- ALEJANDRO CONTY VIDAL: 18.800.00 euros.
- ARQUITECTURA Y TÉCNICAS ESPECIALES: 14.950,00 euros.

En esa misma fecha, el Subdirector General de Proyectos y Obras emite informe en el que indica: *“ Una vez analizada la documentación presentada, se comprueba que es completa y correcta, y se estima que la oferta presentada por ARQUITECTURA Y TÉCNICAS ESPECIALES (ARTER) resulta la más ventajosa para la Agencia de Vivienda Social”,* proponiendo dicha empresa la realización del contrato.

Coordinación de Seguridad y Salud: Se solicita oferta con fecha 13 de diciembre a los arquitectos ALFONSO HERNÁNDEZ GARCÍA, - JAIME MATESANZ BERNABÉ - SUSANA VALBUENA MARTÍNEZ , requiriéndoles asimismo indicación de la fecha de disponibilidad para el comienzo de los trabajos.

Con fecha de 16 de diciembre las empresas referidas presentan las siguientes ofertas (sin IVA):

- ALFONSO HERNÁNDEZ GARCÍA: 500 euros/mes
- JAIME MATESANZ BERNABÉ: 2.500 euros.
- SUSANA VALBUENA MARTÍNEZ: 1.360 euros/mes

Con fecha 19 de diciembre, el Subdirector General de Proyectos y Obras emite informe en el que indica: *“Una vez analizada la documentación presentada, se comprueba que ALFONSO HERNÁNDEZ GARCÍA no refiere, a diferencia de las otras dos ofertas, tal y como han sido requeridos expresamente, la fecha de disponibilidad para el comienzo de los trabajos, cuestión determinante en una contratación de emergencia,*



por lo que su oferta no puede ser aceptada. Se constata que la documentación presentada por JAIME MATESANZ BERNABÉ y SUSANA VALBUENA MARTÍNEZ es completa y correcta, refiriendo en ambos casos una disponibilidad total o inmediata para la prestación del servicio en caso de resultar adjudicatario. Desde el punto de vista económico, la oferta de JAIME MATESANZ BERNABÉ resulta más ventajosa para la Agencia de Vivienda Social, ya que ofrece un precio fijo de 2.500 euros con independencia de la duración de las obras de demolición, ofreciendo SUSANA VALBUENA MARTÍNEZ un precio variable según duración de obra de 1.360 euros al mes. Habida cuenta que el plazo estimado de ejecución, según la oferta que se propone adjudicar del contrato de obra de derribo es de 2,5 meses, resultaría un precio total de 3.400 euros. Por todo ello, se propone a JAIME MATESANZ BERNABÉ para la realización del objeto del contrato”.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, LCSP), regula el procedimiento de emergencia en materia de contratación pública.

Así, este precepto establece que cuando la Administración tenga que actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional, se estará a ese régimen excepcional por el que el órgano de contratación, sin obligación de tramitar expediente de contratación, podrá ordenar la ejecución de lo necesario para remediar el acontecimiento producido o satisfacer la necesidad sobrevenida, o contratar libremente su objeto, en todo o en parte, sin sujetarse a los requisitos formales establecidos en la presente Ley, incluso el de la existencia de crédito suficiente.

De acuerdo con el artículo 20.1 de la Ley 1/1984, de 19 de enero, reguladora de la Administración Institucional de la Comunidad de Madrid, los Gerentes son los órganos de contratación de los Organismos Autónomos y están facultados para celebrar contratos en su nombre y representación, en el ámbito de sus respectivas competencias. Por otro lado, el artículo 3.2 del Decreto 49/2003, de 3 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid señala que son Órganos de contratación los Gerentes son los órganos de contratación de los Organismos Autónomos y están facultados para celebrar contratos en su nombre y representación, en el ámbito de sus respectivas competencias. No obstante, en los contratos cuya celebración deba autorizar el Gobierno de la Comunidad de Madrid, el Gerente dará cuenta al Consejo de Administración del Organismo Autónomo.

Segundo. La contratación de emergencia es una contratación residual sujeta a una serie de límites, los cuales han sido sistematizados en el Informe de la Junta consultiva de Contratación Pública del Estado (Nº expediente 17/2019), en base a la doctrina del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, debiendo analizarse la concurrencia de cada uno de ellos:



- I) Que concurra alguno de los supuestos que taxativamente establece la ley, sin que sea suficiente cualquier otra circunstancia que dé lugar a una situación de urgencia.

Como se ha expuesto anteriormente, existe un peligro grave y cierto para la seguridad y salud de personas antes el riesgo de derrumbe o colapso inminente del edificio, que pudiera asimismo afectar al centro educativo colindante. Asimismo, el no derribo inminente implica también un elevado riesgo de ocupación del inmueble, con el consecuente peligro para la integridad los ocupantes, además de otros perjuicios que derivarían del no derribo inmediato: costes de vigilancia y retraso en el proyecto de construcción de sesenta viviendas de integración social.

- II) Que no sea suficiente para resolver la situación la utilización de otros procedimientos menos restrictivos de la libre concurrencia.

Tal y como se ha indicado anteriormente, los procedimientos con licitación ordinaria conllevan una tramitación de varios meses, sin que pueda asumirse en ese periodo el riesgo de derrumbe o colapso del edificio, así como el riesgo de una nueva ocupación ilegal.

Por otro lado, tampoco es viable la contratación menor de obra, aunque por límite temporal sí sería factible dada la vigencia máxima del contrato menor, los importes de adjudicación superan claramente los límites establecidos por la Ley para el uso de esta figura contractual.

- III) Que la tramitación se limite a lo estrictamente indispensable en el ámbito objetivo y temporal para prevenir o remediar los daños derivados de esa situación.

El contrato que se tramita por emergencia se dirige exclusivamente a la adopción de medidas imprescindibles, quedando fuera de la emergencia cualquier actuación sucesiva de obra, que resulte ahora accesorio, y no sea imprescindible para el fin previsto. Siendo así el objeto del contrato se restringe exclusivamente a la demolición estructural del edificio, no incluyéndose fases posteriores de obra, tales como explanación del terreno, vaciados o movimientos de tierra, que no responden a la emergencia en el sentido de que no resultan imprescindibles para satisfacer la necesidad sobrevenida.

- IV) Que la causa de la emergencia no sea imputable al propio órgano de contratación, es decir, que la situación de emergencia no hubiera podido ser evitada por el órgano de contratación mediante una actuación diligente.

No era posible la planificación y programación de la demolición con anterioridad, ya que hasta que no se recuperó de manera efectiva, no era posible conocer el estado de deterioro en que se encontraba; y hasta el informe técnico de 11 de diciembre antes referido, no era posible conocer que ese deterioro implicaba un riesgo inminente de colapso o derrumbe.

En virtud de lo expuesto, esta Dirección Gerencia de la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid, en uso de las atribuciones que le han sido conferidas por las disposiciones vigentes,



RESUELVE

Primero. Ordenar la tramitación y ejecución, con carácter de emergencia, de los siguientes contratos:

CONTRATO DE OBRAS DE DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO SITO EN LA CALLE PUERTO DEL MILAGRO NÚMERO 2 (MADRID), que será llevado a cabo por la empresa CONSTRUCCIONES ARRIBAS GOZALO S.A., con N.I.F. A78823234, en las condiciones establecidas y por un precio que asciende a 464.100, 00 € (I.V.A. no incluido).

El gasto se tramitará con cargo a la partida presupuestaria 62000 a imputar en el ejercicio de 2025.

CONTRATO DE SERVICIOS DE REDACCIÓN DE PROYECTO Y DIRECCIÓN FACTULTATIVA DE LAS OBRAS DE DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO SITO EN LA CALLE PUERTO DEL MILAGRO NÚMERO 2 (MADRID), que será llevado a cabo por la empresa ARQUITECTURA Y TÉCNICAS ESPECIALES (ARTER), con NIF B86159746, en las condiciones establecidas y por un precio que asciende a 14.950,00 euros (I.V.A. no incluido).

El gasto se tramitará con cargo a la partida presupuestaria 62101 a imputar en el ejercicio de 2025.

CONTRATO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO SITO EN LA CALLE PUERTO DEL MILAGRO NÚMERO 2 (MADRID), que será llevado a cabo por el arquitecto técnico D. JAIME MATESANZ BERNABÉ, número colegiado nº 101.144 las condiciones establecidas y por un precio que asciende a 2.500,00 euros (I.V.A. no incluido).

El gasto se tramitará con cargo a la partida presupuestaria 62101 a imputar en el ejercicio de 2025.

Segundo. Los contratistas referidos en el apartado anterior deberán constituir una garantía definitiva por importe equivalente al 5% del importe del contrato IVA excluido.

Tercero. El inicio en la ejecución de los trabajos contratados tendrá lugar a partir del día siguiente al de la notificación de la presente Resolución.

Cuarto. De la presente Resolución se dará cuenta en el plazo de 30 días al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, según lo dispuesto en la Instrucción 6ª de la Circular 1/1998, de 26 de enero, de la Intervención General de la Comunidad de Madrid, por la que se dictan instrucciones sobre el ejercicio de la función fiscalizadora.



Quinto. Notificar la resolución a los propuestos adjudicatarios.

En Madrid, a la fecha de firma,

PROPUESTO,
SUBDIRECTOR GENERAL DE PROYECTOS Y OBRAS

DIRECTORA DE ÁREA DE PROMOCIÓN Y REHABILITACIÓN

VºBº EL SECRETARIO GENERAL

EL DIRECTOR GERENTE



La autenticidad de este documento se puede comprobar en
<https://gestiona.comunidad.madrid/csv>
mediante el siguiente código seguro de verificación: **0964078044018923486006**